

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante	Víctor Manuel Guzmán Arteaga
Demandado	AFP Porvenir y otros
Tipo de proceso	Ordinario
Radicado Nacional	05-001-31-05- 003-2020-00373 -02
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio 62 de 2023
Tema y subtema	Apelación liquidación de agencias en derecho
Decisión	Confirma

Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la AFP Colfondos S.A., contra el auto del 14 de julio de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Víctor Manuel Guzmán Arteaga**, código radicado número 05001 3105 **003 2020 00373** 02.

Antecedentes

Mediante proveído del 14 de julio del año que corre, el Juzgado de conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P., liquidó y aprobó las agencias en derecho así:

“

Atendiendo a lo ordenado en el auto que antecede, se dispone a efectuar la liquidación de las costas para lo cual se tendrán cuenta las agencias fijadas en primera en la suma de cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos m.l. (\$ 4.640.000.00), en segunda instancia no se condenó en costas

Agencias en derecho 1ra instancia	\$	4.640.000.00
Agencias en derecho 2da instancia	\$	0.00
Agencias en derecho Casación	\$	0.00
Otros gastos	\$	0.00
Total.....	\$	4.640.000.00

Total, costas y Agencias en derecho en la suma de cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos m.l. (\$ 4.640.000.00).

”

El apoderado de la AFP Colfondos formuló **recurso de reposición** y en subsidio **apelación**, solicitando revocar tal proveido, señalando:

- "1. Se considera que la condena impuesta a mí representada por concepto de costas y agencias en derecho, según la liquidación efectuada por el Despacho, no se ajusta a la situación de Colfondos, en el caso que nos ocupa, toda vez sobrepasan considerablemente el límite máximo fijadas en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, por el Consejo Superior de la Judicatura y el nuevo acuerdo No. PSAA16 – 10554 del 05 de agosto de 2016, por el Consejo Superior, en el cual establecen las tarifas de agencias en derecho.*
- 2. Por lo anterior, conforme la naturaleza del asunto, la duración del proceso, el número de audiencias realizadas dentro del proceso, la suma impuesta DEBIÓ ser menor a la fijada en la audiencia, como agencias en derecho de primera Instancia.*
- 3. Aunado al hecho de que dentro del proceso son más las entidades demandadas, quienes también salieron vencidas en juicio, y a su vez propusieron excepciones de mérito, por lo que la condena debió ser a cuota parte entre las entidades demandadas y no solo a cargo de mi representada.*
- 4. El monto fijado por costas procesales impuestas a mi representada no se refleja a los principios universales de equidad, justicia e igualdad, ya que en el proceso se absolvió a Colpensiones de la condena en costas, cuando estas entidades también se opusieron a las pretensiones de la demanda y solamente se condenó a mi representada.*
- 5. En ese sentido, se deben aplicar las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas"*
(...)
- 7. Observando la labor del profesional en derecho en el curso primera la instancia, se advierte que no estuvo enmarcada dentro de una especial dificultad, no se exigió mayor*

actividad probatoria, y como se puede apreciar en el plenario, una vez trabada la litis, se les citó para las audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del CPT y la SS.

8. La condena en costas es improcedente: En el caso presente debe tenerse en consideración que la parte demandante es el trabajador, por tanto, al ser el derecho laboral un derecho tuitivo, no resulta proporcional una condena tan elevada.

9. La tasación de las agencias en derecho que establece no menciona las circunstancias especiales que se tuvieron en cuenta para la fijación de este concepto, no resulta razonable una fijación en agencias en derecho tan elevada para un proceso que, en atención a su naturaleza y al trámite del proceso no requirió una actuación prolongada, por el contrario, se resolvió en un trámite corto, así mismo no corresponde una condena tan elevada en contra del demandante, aunado al hecho de que el fallador no hace referencia a los criterios particulares del proceso que tuvo en cuenta para realizar dicha liquidación.

10. Por lo cual debe revocarse el auto y disminuirse el valor de las costas y agencias en derecho que fueron liquidadas. O en caso de confirmarse el valor de la condena en costas, deberá extenderse la condena a las demás entidades demandadas y vencidas en juicio, por lo tanto, el valor de las costas deberá pagarse a cuota parte entre las demandadas. (...)”

Mediante pronunciamiento del 24 de julio, el a quo no repuso al considerar que no le asiste razón al recurrente, pues al momento de hacer la tasación, *se sujetó a los criterios dispuestos por el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que conforme a la naturaleza del asunto, se establecen las agencias en derecho entre 1 a 10 smmlv, habiéndose fijado la suma de \$4.640.000,00 a cargo de COLFONDOS que equivalen a 4 smmlv, estando por consiguiente la liquidación conforme a los montos mínimos y máximos establecidos por la normatividad vigente.* En su lugar concedió el recurso de alzada, disponiendo el envío del expediente a esta Corporación.

Consideraciones

La inconformidad radica en la fijación de las agencias, pues el recurrente argumenta, en síntesis, que las mismas en primera instancia corresponden a un valor mucho menor.

Sea lo primero señalar que, para dirimir el asunto, ha de atenderse lo establecido en **el Acuerdo PSAA1610554 del 5 de agosto de 2016** de

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual determina que el valor de las agencias en derecho para los procesos en primera instancia, **en asuntos que carezcan de cuantía entre 1 y 10 SMMLV**, y en segunda instancia, **entre 1 y 6 S.M.M.L.V.**

Conforme a lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si los montos impuestos se encuentran dentro de los límites del referido compendio o, en caso contrario, si deben ser reducidos.

Es menester precisar que la norma citada no puede estudiarse e interpretarse aisladamente, pues se observa que el Artículo 2º del citado Acuerdo hace alusión a los criterios en los cuales debe basarse el juzgador para tasar las agencias en derecho, indicando:

Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Significa lo anterior, que el juzgador cuenta con diferentes pautas para determinar la suma correspondiente a las agencias en derecho y que lo hace de una manera discrecional, pero dentro de los términos legales.

Debe advertirse que lo debatido en este trámite **corresponde a un asunto sin cuantía**, en la medida que se trata de un proceso declarativo, en el que se estableció la ineficacia de una afiliación, ordenándose como consecuencia a las demandadas obligaciones de hacer, lo que permite al juez imponer un monto de **hasta 10 salarios mínimos legales**, siendo tal valor equivalente para el caso a un máximo de **\$11.600.000.oo**,¹ y en la instancia inicial se

¹ Fecha de la sentencia de primera instancia: 2 de febrero 2023. SMLMV=1.160.000.oo

tasaron en **\$4.640.000.00 a cargo de la AFP privada**, monto que se encuentra dentro del tope señalado en la norma, y se compadece con la gestión desplegada por el apoderado del demandante, la duración del trámite, y atención y diligencia al encargo, pues si bien el asunto no ofrece mayor complejidad, el vocero judicial ejerció su función durante más de dos años en primera instancia, con diligencia, atendiendo los requerimientos del despacho y asistiendo a la audiencia programada, aunado a que tampoco puede perderse de vista que el demandante se vio forzado a contratar los servicios del profesional del derecho para iniciar el trámite ordinario y lograr sus pedimentos, luego, no es dable pauperizar los esfuerzos del actor para acceder a la administración de justicia, ni la labor del abogado, y en esa medida, considera la Sala razonable el monto fijado, por lo que no hay lugar a modificación.

Y en cuanto a la petición subsidiaria del apoderado recurrente, respecto a que, *en caso de confirmarse el valor de la condena en costas, debe extenderse a las demás entidades demandadas y vencidas en juicio, ordenándose el pago de las costas a cuota parte entre las demandadas*, se recuerda que la condena en costas como tal fue impuesta en primera instancia únicamente a su representada, **decisión que fue confirmada en esta sede, sin que en la oportunidad procesal pertinente hubiese realizado el planteamiento que hoy arguye**, no siendo esta la etapa para tal discusión, pues no puede perderse de vista que en el estadio actual, en los términos del numeral 5° del artículo 366 del Código General del Proceso, únicamente lo que se controvierte es la **liquidación**, la cuantía de las expensas y el monto de las agencias en derecho, no la imposición, pues este asunto se reitera fue definido al emitir la sentencia, en la cual se determinó que la única obligada a pagarlas era la AFP privada, quien *faltó a su obligación de diligencia debida, de buen consejo, que debió desplegar hacia Víctor Manuel Guzmán Arteaga, al no darle información veraz, clara, y oportuna al momento de trasladarse del RPM al RAIS y a lo largo de toda la afiliación*, sin que en aquella actuación hubiese tenido injerencia la otra Colpensiones.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado. Art. 365-8 CGP.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

Resuelve

Confirmar el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el 14 de julio del año 2023, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Víctor Manuel Guzmán Arteaga** en contra de **la AFP Colfondos S.A. y Colpensiones.**

Sin costas en esta instancia al no haberse causado. Art. 365-8 CGP.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Las magistradas, (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Rad.: 05001 3105 **003 2020 00373** 02
Demandante: Víctor Manuel Guzmán Arteaga
Demandado: AFP Colfondos S.A. y ootros

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 186 del 31 de octubre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>